



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género*

---

**2010/2017(INI)**

27.6.2011

## **PROYECTO DE INFORME**

sobre la contribución de las políticas de la UE a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres para combatir la delincuencia juvenil  
(2010/2017(INI))

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Ponente: Anna Záborská,

PR\871755ES.doc

PE448.877v03-00

**ES**

*Unida en la diversidad*

**ES**

## ÍNDICE

	<b>Página</b>
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	3
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	7

## PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

### sobre la contribución de las políticas de la UE a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres para combatir la delincuencia juvenil (2010/2017(INI))

*El Parlamento Europeo,*

- Visto el artículo 26, apartado 3, de la Declaración Universal de Derechos Humanos<sup>1</sup>, el artículo 13, apartado 3, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales<sup>2</sup>, el artículo 18, apartado 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos<sup>3</sup>, el artículo 3, apartado 2, el artículo 5, el artículo 7, apartado 1, el artículo 14, apartado 2, el artículo 18, apartado 1, el artículo 27, apartado 2 y el artículo 29, apartado 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño<sup>4</sup> y los artículos 16 y 17 de la Carta Social Europea Revisada del Consejo de Europa<sup>5</sup>,
- Visto el artículo 48 de su Reglamento,
- Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0000/2011),

#### ***Encuadre del tema***

1. Expresa su deseo de iniciar una reflexión sobre el tema de la política de igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo para que los hombres y las mujeres que lo deseen puedan participar de forma activa en las iniciativas públicas e individuales dirigidas a poner freno a la delincuencia y los actos juveniles contrarios al civismo;
2. Recuerda que el artículo 18, apartado 1, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño consagra la función parental como primera palanca de la acción pública en interés del niño y que impone a los Estados obligaciones activas de apoyo a los padres;
3. Resalta que esas instituciones internacionales no tienen suficientemente en cuenta los factores socioeconómicos de la delincuencia juvenil y no plantean con la misma franqueza la cuestión de las condiciones globales necesarias para no discriminar directa o indirectamente a las mujeres y los hombres en el mercado de trabajo;
4. Manifiesta su preocupación por el hecho de que el mercado de trabajo tiende a someter a los hombres y a las mujeres a exigencias cada vez mayores para obtener más rendimiento, lo cual es contrario a las aspiraciones de la Unión de realizar una economía social

---

<sup>1</sup> Aprobada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948.

<sup>2</sup> Resolución 2200 A de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1966, que entró en vigor el 3 de enero de 1976.

<sup>3</sup> Resolución 2200 A de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1966, que entró en vigor el 23 de marzo de 1976.

<sup>4</sup> Resolución 44/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.

<sup>5</sup> Consejo de Europa, Carta Social Europea (Revisada), STCE n° 163, que entró en vigor el 1 de julio de 1999.

competitiva adaptada a las necesidades de los seres humanos en sus relaciones sociales;

### ***Definiciones***

5. Adopta las siguientes definiciones de las «Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)»<sup>1</sup>, que constituye el único instrumento internacional que recoge una definición de «delincuencia juvenil» (apartado 2.2):
  - Menor es todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto;
  - Delito es todo comportamiento (acción u omisión) penado por la ley con arreglo al sistema jurídico de que se trate, y
  - Menor delincuente es todo niño o joven al que se ha imputado la comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la comisión de un delito;
6. Destaca que la delincuencia juvenil está asociada también a los juegos peligrosos, la violencia sexista, los fenómenos de violación o violación en grupo, la sexualización y la pornografía precoces, promovidas sobre todo por Internet, el abuso de productos que se fuman, se beben o se inyectan, los trastornos del comportamiento alimentario, y los excesos, de los que los adolescentes pueden ser tanto autores como víctimas;

### ***Causas de la delincuencia juvenil***

7. Reitera su posición de que «es difícil clasificar de manera absoluta las causas que llevan a un menor a una conducta delictiva»<sup>2</sup>;
8. Hace suyo el repertorio de causas enunciado por el CESE: - la pertenencia del menor a una familia desestructurada («hogar roto») y las dificultades para conciliar la vida familiar y la vida profesional se traducen cada vez más en la concesión a los jóvenes de una atención insuficiente y la ausencia de límites y de control; - la marginación socioeconómica o la pobreza; - el absentismo y el fracaso escolares; - el desempleo juvenil; - la difusión de imágenes y comportamientos violentos por determinados medios de comunicación o videojuegos; - el consumo de drogas y sustancias tóxicas, como el cánnabis, o el consumo inmoderado de alcohol; - la insuficiente enseñanza y transmisión de valores sociales o cívicos, como el respeto de las normas, la solidaridad, la generosidad, la tolerancia, el respeto del prójimo, el sentido de la autocritica, la empatía, el gusto por el trabajo bien hecho, etc., sustituidos en nuestras sociedades «globalizadas» por valores más utilitaristas, como el individualismo, la competitividad y el consumo desmesurado de bienes, que, en determinadas circunstancias, generan una cierta anomia social<sup>3</sup>;

### ***Escuela, solidaridad social y coproducción***

---

<sup>1</sup> Resolución 40/33 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 29 de noviembre de 1985.

<sup>2</sup> Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de junio de 2007, sobre la delincuencia juvenil, el papel de las mujeres, la familia y la sociedad, DO C 146E de 12.6.2008, p.344.

<sup>3</sup> Comité Económico y Social Europeo, Dictamen sobre «La prevención de la delincuencia juvenil, los modos de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor en la Unión Europea», DO C 110 de 9.5.2006, p. 75.

9. Considera que una familia constituye el primer lugar de socialización del niño y que una red familiar ampliada desempeña un papel esencial para la prevención y la rehabilitación;
10. Reconoce que la escuela pública contribuye a la socialización de los adolescentes;
11. Alienta a los servicios sociales públicos a que efectúen, si procede, un seguimiento que no sea percibido como una estigmatización o una carga;
12. Pide a los Estados miembros que mejoren la formación de los profesores, potencien la colaboración entre padres y maestros y tengan en cuenta la palabra de los adolescentes de conformidad con las normas vigentes;
13. Pide a las escuelas que alienten las actividades extraescolares, artísticas y deportivas;
14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación de la Estrategia Europa 2020 y de la estrategia «Educación y Formación 2020»;
15. Pide a los organismos competentes que evalúen las políticas públicas relativas a la eficacia de las penas de sustitución para los jóvenes delincuentes, la repercusión de los estereotipos de género en la delincuencia juvenil, el papel de los medios de comunicación, las distintas experiencias de los niños y las niñas con respecto a la violencia, y el papel desempeñado por los padres, las escuelas y las organizaciones juveniles en la prevención de la delincuencia juvenil;

***Derechos del niño, asesoramiento a los hombres y las mujeres responsables de los niños***

16. Pide a los Estados miembros que apoyen las redes de asesoramiento profesional para las familias, las parejas con dificultades en su relación parental, y para los adolescentes con problemas relacionados con estilos de vida peligrosos y formas de dependencia;
17. Pide a los Estados miembros que concedan un apoyo especial a los inmigrantes, que garanticen el acceso a la vivienda, a la enseñanza elemental, a los servicios sanitarios y al mercado de trabajo;
18. Pide a los Estados miembros que promuevan la adopción de medidas de asesoramiento a los jóvenes con problemas de socialización, la lucha contra la discriminación hacia miembros de su comunidad de origen, y la elaboración y aplicación de programas dirigidos a combatir todas las formas de violencia basadas en la procedencia social;
19. Resalta que los jóvenes que viven en la pobreza tienen más probabilidades de enfrentarse a problemas, y pide a las instituciones competentes que contemplen el trabajo con las familias con dificultades como alternativa al acogimiento del niño;
20. Defiende la utilidad pedagógica de dar la palabra a los adolescentes para evitar una política de seguridad a ciegas, como demuestra el proyecto europeo «¿Sabe dónde está su hijo ahora mismo?», como herramienta de prevención;

***Políticas específicas para hombres y mujeres***

21. Resalta que las necesidades de las mujeres y los hombres se expresan con frecuencia de un modo distinto;

22. Invita a las instituciones a desarrollar sus conocimientos sobre las necesidades expresadas por los niños y los hombres en el ámbito de la igualdad de oportunidades y de la conciliación entre vida profesional y vida familiar;
23. Pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que remuneren mejor las profesiones del sector de la primera infancia y la educación;
24. Pide a las instituciones que reflexionen sobre la creación de riqueza nacional por el trabajo en el hogar de las mujeres y los hombres, a fin de comprobar si existen discriminaciones basadas en el sexo;
25. Pide a las instituciones que reconozcan la actividad profesional y extraprofesional, en particular de las mujeres, en términos de «ciclo de vida»;

***Propuesta de iniciativas a todos los niveles institucionales***

26. Pide a los Estados miembros que establezcan programas de reeducación y reinserción social para jóvenes delincuentes y que apliquen una política judicial de «tolerancia cero» con respecto a los adultos, independientemente de su condición social, que inciten a los adolescentes a la delincuencia, sobre todo facilitándoles el acceso a las drogas duras, al cánnabis y a otros productos nocivos;
27. Invita a los Estados miembros a intensificar sus acciones de prevención de la violencia de carácter sexista entre los jóvenes y a mejorar la colaboración entre las personas y los distintos medios afectados por el fenómeno, como la familia, la escuela, el espacio público y los medios de comunicación; destaca la importancia de realizar campañas de sensibilización sobre las diversas formas de violencia contra las mujeres y de lucha contra los estereotipos sexistas;
28. Pide a las instituciones que reconozcan la importancia del papel educativo de los miembros de la red familiar, concentrándose en el papel de las personas de edad avanzada que han salido del mercado de trabajo;
29. Pide a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para que las mujeres y los hombres puedan elegir mejor cómo conciliar la vida familiar y la profesional;
30. Pide a los Estados miembros que promuevan una política fiscal que tenga en cuenta las obligaciones financieras, en particular los costes asociados a los distintos modos de cuidado de niños;
31. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y los documentos de estudio correspondientes al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos de los Estados miembros.

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El criminólogo alemán Christian Pfeiffer, experto invitado a una audiencia pública de la Comisión de Derechos de la Mujer sobre el estudio de la delincuencia juvenil<sup>1</sup>, demuestra que las repercusiones de la implicación parental en la lucha contra la delincuencia juvenil pueden ser rápidas: *«Los padres contribuyen durante el mayor tiempo posible a la prevención de la criminalidad si, en su función de primeros modelos de identificación, responden atentamente y con sensibilidad a las necesidades en términos de cuidados y de cariño del lactante. (...) Incluso para los jóvenes más maduros, la presencia de adultos solícitos es indispensable. Si los adultos se encuentran ausentes de la vida de los jóvenes, resulta imposible transmitir a estos últimos los valores de los adultos, como la confianza en sí mismo, la disciplina personal, la urbanidad, el respeto mutuo, la paciencia, la generosidad y la empatía.»*

La eficacia de la responsabilidad parental a la hora de prevenir la delincuencia juvenil se deriva —entre otros factores de importancia variable— de la posibilidad material ofrecida a los padres y a las madres de estar presentes en la célula familiar acompañando a sus hijos. El presente informe se inscribe en esta reflexión. Se fundamenta en la existencia de una relación concomitante, empíricamente experimentada y científicamente probada, entre las conductas juveniles de transgresión de las normas y de rechazo de la autoridad, e incluso de violencia contra el prójimo y las condiciones materiales necesarias para el desarrollo de las capacidades sociales (que aluden a las relaciones sociales) y de las capacidades humanas (que aluden a los conocimientos, las cualificaciones, las competencias y características individuales que promueven el bienestar personal, social y económico) de los adolescentes. Las conductas juveniles de riesgo buscan, en efecto, transgredir las normas establecidas de la sociedad, como forma de denunciar sus injusticias, sus desigualdades y su hipocresía.

Cabe preguntarse si la familia sigue encarnando la mejor protección contra el riesgo de delincuencia juvenil. ¿Qué dicen las instituciones internacionales sobre el vínculo entre el «factor familia», la responsabilidad parental y la delincuencia juvenil? Todas las instituciones políticas y económicas internacionales subrayan en la actualidad la importancia cada vez mayor de la responsabilidad parental en el desarrollo del adolescente y, por ende, la importancia de la vigilancia y del compromiso parental en la lucha contra las conductas juveniles de transgresión de las normas o los actos de violencia contra el prójimo.

En cambio, el responsable político se pregunta con mucha menor frecuencia sobre las condiciones materiales que deben darse para que los hombres y las mujeres puedan alcanzar realmente este ideal de efectividad de la autoridad parental, sin que por ello las mujeres y los hombres sufran discriminaciones visibles o invisibles en el mercado laboral o se produzca una situación de precariedad latente, con carácter inmediato o con efecto retardado, en los regímenes nacionales de seguridad social.

Por eso tiene sentido formularse las preguntas siguientes: ¿Contribuyen realmente las políticas de igualdad de oportunidades a combatir la delincuencia juvenil a través de la responsabilidad parental? La «flexiguridad» que caracteriza en la actualidad al mercado laboral ¿ofrece realmente más seguridad individual a los asalariados, sobre todo en las profesiones menos cualificadas, así como un mejor equilibrio entre su vida familiar y sus proyectos

---

<sup>1</sup> Organizada por la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo el 20 de marzo de 2007 bajo la presidencia de la D<sup>a</sup> Anna Záborská.

profesionales? ¿Qué condiciones políticas y materiales deberían darse para evitar la discriminación en el mercado laboral o la situación de precariedad de las mujeres y los hombres que deciden libremente implicarse en el desarrollo de las capacidades humanas y sociales de las generaciones futuras? Las políticas de conciliación entre vida familiar y vida profesional ¿están orientadas a un auténtico equilibrio entre las dos alternativas?

De cara al futuro, en una primera etapa, Eurostat debería desarrollar unos indicadores capaces de medir la riqueza humana de las naciones más allá del PIB y publicar cifras y estadísticas que demuestren lo apropiado del enfoque. En efecto, sin unas cifras que lo avalen, cualquier debate político seguirá siendo hipotético, por mucho que convengamos en la necesidad que se acusa a nivel humano de una actuación política. En la actualidad se intenta someter cualquier actividad humana a un sistema de indicadores que midan su rendimiento y a evaluar la aportación de la misma al bien común en términos de PIB. Sin embargo, la actividad humana que ejercen mujeres y hombres con miras a frenar la delincuencia juvenil mediante el desarrollo de las capacidades humanas y sociales de las generaciones futuras no es susceptible de ser medida o evaluada. Ninguna estadística de los sistemas de contabilidad nacional (SCN) contempla esta creación de valores, por muy tangible que sea: la estadística laboral la pasa por alto. De no incluirse en alguna estadística, la implicación en la vigilancia y el compromiso parental en la lucha contra las conductas juveniles de transgresión de las normas o los actos de violencia contra el prójimo no se reconocerá nunca, por mucho que todos los observadores convengan en confirmar su existencia real en la vida cotidiana.

En una segunda etapa, la comisión debería emprender un análisis de impacto sobre las consecuencias, incluidas las presupuestarias, de la aplicación del sistema de integración de la perspectiva de género, con vistas a evaluar su pertinencia, efectividad, durabilidad y utilidad en términos de relación coste-eficacia/valor añadido, como es norma habitual en las demás políticas europeas, tal como ha solicitado el parlamento (P7\_TA(2010)0232, apartado 43). Este análisis de impacto debería contrastarse con las estadísticas del Eurobarómetro para conocer la auténtica necesidad y, por ende, la oportunidad de la inversión del presupuesto público en estas políticas. Dicho estudio cualitativo debería poner igualmente de manifiesto si la integración de la dimensión hombres-mujeres lleva a los ciudadanos a una elección realmente equilibrada, y a qué coste para la sociedad.

A modo de hipótesis, se podría formular que el reconocimiento en términos económicos contabilizados de la inversión de las mujeres y los hombres en medidas que tengan por objeto frenar la delincuencia juvenil mediante el desarrollo del capital humano y social de las futuras generaciones, como auténtica inversión en favor del bien común en las estadísticas nacionales del PIB, resulta indispensable para demostrar el valor añadido de esta actividad. No obstante, dada la falta de pruebas del valor añadido que supone en términos económicos contabilizados, esta inversión no se valora y las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no la tienen en cuenta. Se trata de una injusticia estructural contra la que hay que luchar.